

# La integración europea en la encrucijada: fortalecimiento o desintegración

*Elmar Altvater y Birgit Mahnkopf*

¿Son los Estados miembros de la zona del euro que tienen problemas para hacer frente al pago de su deuda los responsables de la crisis? La mayoría de los europeos así lo creen. Por consiguiente, países endeudados como Grecia, Irlanda o Portugal deben someterse a un draconiano programa de austeridad consistente en recortes salvajes en el gasto social, reducciones salariales en el sector público y medidas de privatización en los sectores de la educación y la salud, así como en el sistema de pensiones. Resumiendo, los derechos sociales y culturales de los sindicatos y de los ciudadanos están siendo pisoteados, lo que está provocando tanto protestas sociales como elogios.

La austeridad impuesta es impulsada por un intento de liberar fondos del presupuesto primario para utilizarlos seguidamente en el presupuesto secundario a fin de pagar deuda y rescatar instituciones financieras al borde de la bancarrota que se consideran «sistémicamente relevantes». Sin embargo, el sistema, a saber, el proyecto de integración monetario europeo, sólo puede salvarse con un giro drástico de dirección política. Sólo hay dos caminos que puedan tomarse en la situación actual, y llevan por direcciones opuestas: uno hacia la desintegración de la zona del euro y el otro hacia el fortalecimiento de las funciones estatales de Europa. Los economistas y políticos conservadores y neoliberales están jugando con la idea de dividir la unión monetaria en dos (o más) partes. Por un lado, una «Europa esencial» fuerte e integrada monetaria y financieramente, por el otro, los países que se excluirían de la zona del euro, con sus propias monedas nacionales. Así pues, serían Alemania, Francia y unos pocos más los que seguirían utilizando el euro, pero Grecia tal vez tendría que volver a introducir el dracma, Portugal el escudo, España la peseta e Italia la lira.

La división de la zona del euro crearía otras áreas de caos económico y agitación social y política. Las nuevas monedas que sustituirían al euro probablemente sufrirían una caída inmediata de su valor. La devaluación aumentaría el valor de la deuda denominada en euros (que, por consiguiente, también tendría que pagarse en euros). Las agencias de calificación rebajarían la calificación crediticia de dichos países. Si bien la devaluación aumentaría la competitividad monetaria, es muy poco probable que esta ventaja fuese a resultar muy útil, a menos que la competitividad real aumentara con

ella. Las industrias a la exportación necesarias brillan por su ausencia. En la medida en que se devalúen las nuevas monedas, el euro restante aumentará de valor. Esta revaluación limitaría la competitividad de la llamada «economía real» en los Estados miembros de la zona del euro y alentaría al capital financiero a especular. Es imposible predecir qué tipo de equilibrio se lograría tras un tal período de turbulencia económica.

El otro camino lleva hacia una integración política más profunda. La legislación que rige la deuda pública establecida por el Tratado de Maastricht es obviamente insuficiente para prevenir los desequilibrios y las crisis que están experimentándose en toda Europa. Estos desequilibrios son inevitables si países como Alemania reducen los costos laborales unitarios al tiempo que éstos aumentan en otros países europeos. El sistema actual de gestión de la crisis exige que los países endeudados se ajusten, pero

***El sistema actual de gestión de la crisis exige que los países endeudados se ajusten, pero no así los países con superávit***

no así los países con superávit. La deficiencia estructural que ya contribuyó al colapso del sistema de Bretton Woods en el decenio de 1970 está reproduciéndose en la zona del euro. Las medidas necesarias para corregirla serían las siguientes: del lado de los ingresos de los presupuestos públicos, la formulación de legislación en materia de política y competencia fiscales, así como mecanismos compensadores para los países que registran déficit o superávit por cuenta corriente. Para que la zona del euro tenga futuro, son las funciones estatales de Europa las que deben fortalecerse, no el mercado.

Hoy, la distribución desigual de los ingresos y la riqueza en Europa, junto a las valoraciones de las agencias de calificación generan grandes diferenciales de tipo de interés entre los países endeudados y los países «ricos». En los países, esta situación es aplicable únicamente a los propietarios de riqueza monetaria, no a los trabajadores asalariados. En los países deudores los resultados son cuentas de capital con saldos

***El apremio para generar superávit en cuenta corriente está instrumentalizado para justificar las medidas de austeridad***

negativos; si las cuentas corrientes no generan o sólo generan pequeños superávit, estos saldos sólo pueden corregirse con inlujos de capital nuevo. El apremio para generar superávit en cuenta corriente está instrumentalizado para justificar las medidas de austeridad, es decir, los recortes salariales y del gasto público. Las personas afectadas por estas políticas no aceptan esta justificación, y están lanzándose a las calles para hacer oír su protesta, fuerte y determinada.

No obstante, hay que entender que las relaciones monetarias siempre son mutuas y contradictorias, lo que también ocurre en los mercados financieros europeos y globales. Allí donde hay deudores, hay acreedores, y si los déficit deben reducirse, los superávit no pueden aumentar. Por consiguiente, no puede echarse la culpa de los niveles actuales de deuda pública únicamente a la aplicación de políticas fiscales y

presupuestarias «laxas» en los países de la zona del euro que en la actualidad están sumidos en la crisis. También tiene su parte de culpa la política de redistribución que alienta la formación de grandes carteras de activos privados. Además, no podemos pasar por alto el hecho de que la deuda pública de la zona del euro es tan elevada debido, en gran parte, a los desmesurados rescates de bancos y fondos llevados a cabo. El que los Estados tengan que pagar aún más para liquidar su deuda tiene también otra cara: los actores del mercado financiero privado tienen que pagar menos. El Banco Central Europeo lo ha reflejado claramente en su informe, de elocuente título, «The Janus-headed salvation» (Una salvación con dos caras) publicado tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Los bancos que se encontraban en peligro pudieron deshacerse de gran parte de sus activos basura en «bancos malos» financiados con capital público. Además, su masa de capital se reactivó con cargo a fondos públicos, particularmente sin que los gobiernos ejerciesen ningún tipo de control sobre los negocios de los bancos hoy socializados. Los Estados garantizaron la deuda de los bancos, mientras a estos últimos se les concedía un acceso casi ilimitado a dinero barato de los bancos centrales. Un resultado del rescate de los bancos con fondos públicos es que el nivel de riesgo de impago de los créditos por parte de las instituciones financieras es reducido, mientras que el del sector público va en aumento. El informe antes mencionado del Banco Central Europeo hace referencia a una «transferencia del riesgo de impago del sector bancario a los gobiernos».

Siempre que se renegocian las deudas, los gobiernos tienen que pagar en una medida equivalente primas de riesgo más elevadas, ¿pero a quién? A los mismos bancos que fueron rescatados por los gobiernos e, indirectamente, a los propietarios del capital que invirtieron en dichos bancos y fondos. Aquí, los bancos reciben la ayuda de las agencias de calificación, que rebajan la «calidad» de los bonos del Estado debido a sus niveles de deuda cada vez mayores. Nos encontramos ante una significativa injerencia en las prerrogativas democráticas. Una clasificación peor hace que sea más caro obtener créditos y renegociar la deuda, y permite a los acreedores privados recaudar tipos de interés más altos. Básicamente tenemos ante nosotros una profecía que contribuye a su propio cumplimiento: las predicciones de inminente impago de la deuda llevan a un servicio de la deuda más caro, lo que a su vez aumenta las probabilidades de impago. Debe someterse a las agencias de calificación a un control democrático. Con este telón de fondo, países como Grecia plantean serias dudas sobre la legitimidad de la deuda pública.

Para estar seguros, la reducción de las deudas y de la riqueza monetaria también puede conseguirse a través de la inflación. La inflación que muchos temen ya ha empezado a asomar la cabeza en forma de precios más altos de las materias primas y el oro. Las causas son complejas, y no están relacionadas exclusivamente con los mercados financieros y monetarios, sino también con los mercados de las materias

primas y de la energía, que están sujetos a catástrofes como la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México, la fusión nuclear de Fukushima y los conflictos que están teniendo lugar en el mundo árabe. La inflación aumentaría drásticamente la desigualdad distributiva. Los bancos centrales luchan contra los llamados efectos secundarios del aumento de los precios. ¿Cómo lo hacen? Previene los aumentos salariales con una rigurosa política monetaria. Esta estrategia no está abordando las causas profundas de la inflación, por lo que resulta inaceptable para los sindicatos.

La exigencia razonable de reducir la deuda pública debe complementarse con la exigencia de una reducción correspondiente de la riqueza monetaria, ya sea a través de un recorte regulado por las leyes relativas a la insolvencia, a saber, que los acreedores paguen su parte de la reducción de la deuda, o a través de la fiscalización efectiva de la riqueza, o una combinación de ambas. Los impuestos sobre la riqueza tienen que reintroducirse en todos los países europeos, al tiempo que tendrá que aumentar el importe de los impuestos que pagan las empresas en general (en particular el impuesto de sociedades), por medio de una convergencia europea para la base imponible y los tipos impositivos, y a través de controles más estrictos sobre los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero. Las leyes sobre insolvencia también son importantes para una cancelación ordenada de la deuda. Esto es especialmente cierto en el caso de las deudas soberanas y necesario para garantizar la paz social y política.

*Este artículo está basado en una declaración del Consejo científico de ATTAC Alemania, en marzo de 2011, el Manifiesto sobre la crisis del Euro, que evaluaba las consecuencias políticas, económicas y sociales de la crisis del euro. Los autores participaron en la redacción de la declaración, son los responsables de las modificaciones que se han llevado a cabo. La versión completa está disponible en alemán y en inglés en el sitio web de Attac Alemania (<http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/wissenschaftlicher-beirat>).*